



Exp: AM-007/2022 – ATENCIÓN TEMPRANA

D^a M^a Luisa Guerrero Tramoyeres, Técnico de Apoyo a la Contratación, como Secretaria de la Mesa de Contratación de esta Consejería, respecto al Acuerdo Marco denominado “**CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**”,

CERTIFICO

Que la Mesa de Contratación, en su reunión del día 18 de noviembre de 2022, ha acordado excluir de la licitación a los siguientes licitadores, por lo siguientes motivos:

SUSANA PLIEGO LÓPEZ (FISIOKID)

Debía subsanar la acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, ya que únicamente presentaba justificación, mediante certificado de la DG de Atención Personas con Discapacidad, por importe de 72.418,50 euros, en el año de mayor ejecución de los últimos tres, frente a los 211.617,60 euros que presentan en función del nº de plazas ofertadas. Asimismo, debía acreditar el alta en el epígrafe 952 del Impuesto de Actividades Económicas.

A este respecto indicar que si bien justifica el alta en el IAE, la acreditación de la solvencia técnica solicitada no queda probada con la documentación aportada, debido a que, únicamente, presenta el Modelo 130 del IRPF donde figuran los ingresos en el año 2021 por el total de las actividades ejercidas, las cuales figuran en el IAE y que ascienden a un total de tres, pero sin especificar el importe correspondiente a cada una de ellas y concretamente el importe a imputar a la prestación del servicio objeto del acuerdo marco. Por lo que a la vista de la documentación presentada y de acuerdo con lo establecido en cláusula primera, apartado 7, punto b) del PCAP del Acuerdo Marco de Centros de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid, no queda acreditada la solvencia técnica requerida en función del número de plazas ofertadas, ya que no presenta documentos suficientes que avalen la realización de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas por importe de 211.617,60 euros.

MARAVILLAS KIDS S.L.

Debía subsanar la acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, ya que únicamente presentaba una declaración de trabajos efectuados, pero no se aportaba ningún documento que justifique su ejecución, por lo que debían acreditarlos, tal como se exige en el punto b), apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP. Asimismo, debía aportar el alta en el epígrafe 952 del Impuesto de Actividades Económicas.

A este respecto indicar que si bien justifica el alta en el IAE, la acreditación de la solvencia técnica solicitada no queda probada, ya que presenta una declaración del empresario manifestando importes aproximados sobre los tratamientos realizados y la edad de los menores atendidos, que supera los 6 años de edad, así como el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades en el que se describe un importe neto sobre la cifra de negocios de 83.560 euros, pero sin especificar el importe correspondiente a cada una de las cinco actividades que tiene reconocidas en el IAE y concretamente el importe a imputar a la prestación del servicio objeto del acuerdo marco. Por lo que, a la vista de la documentación presentada, no queda acreditada la solvencia técnica requerida, ya que no presenta documentos suficientes que avalen la realización de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas por importe de 23.145,15 euros.



FUNDACIÓN CEDEL

Debía subsanar la acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, ya que únicamente presentaba una declaración de trabajos efectuados, pero no se aportaba ningún documento que justifique su ejecución, por lo que debían acreditarlos, tal como se exige en el punto b), apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP.

A este respecto señalar que la acreditación de la solvencia técnica solicitada no queda probada, ya que comprobada la documentación presentada para su justificación (facturas), a través de las bases de datos obrantes en la Comunidad de Madrid, se deduce que una parte de los servicios de tratamiento realizados se refieren a niños mayores de 6 años. Por lo que, a la vista de la documentación presentada, no queda acreditada la solvencia técnica requerida, ya que no presenta documentos suficientes que avalen la realización de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas por importe de 48.936,57 euros.

AFANIAS, ASOCIACION PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

Debía subsanar la acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, ya que presentaba certificados de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, respecto de un centro privado de educación especial, donde, no se indicaban los importes que corresponderían a los servicios similares solicitados como solvencia (tratamientos dirigidos a menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas), de los servicios ejecutados puramente educativos.

A este respecto señalar que para acreditar la solvencia técnica solicitada presenta la cesión de solvencia de la Entidad APANID, que no constaba previamente en el DEUC, ni se había presentado con anterioridad hasta este momento de subsanación.

Asimismo, presenta declaración del empresario manifestando el gasto de personal en la atención a niños y niñas hasta 6 años en relación a los especialistas que les atienden en las áreas específicas: logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y trabajo social, pero sin documentación que justifique dicho importe.

Por lo que a la vista de la documentación presentada y de acuerdo con lo establecido en cláusula primera, apartado 7, punto b) del PCAP del Acuerdo Marco de Centros de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid, no queda acreditada la solvencia técnica requerida en función del número de plazas ofertadas, ya que no presenta documentos válidos que avalen la realización de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas por importe de 54.557,40 euros.

MARÍA TERESA SALAZAR RIVAS (EDUCATEK)

Debía subsanar la acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, ya que únicamente presentaba una declaración de trabajos efectuados, pero no se aportaba ningún documento que justifique su ejecución, por lo que debían acreditarlos, tal como se exige en el punto b), apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP. Asimismo, debía aportar el anexo XI del PCAP (Declaración Protección del Menor), firmado electrónicamente.

A este respecto indicar que si bien aporta el anexo XI del PCAP (Declaración Protección del Menor), firmado electrónicamente, la acreditación de la solvencia técnica solicitada no queda probada, ya que comprobada la documentación presentada para su justificación (fichas de inscripción), a través de las bases de datos obrantes en la Comunidad de Madrid, se deduce que una parte de los servicios de tratamiento realizados se refieren a niños mayores de 6 años. Por lo que, a la vista de la documentación presentada, no queda acreditada la solvencia técnica requerida, ya que no presenta documentos suficientes que avalen la realización de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas por importe de 74.394,45 euros



UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS FORMADA POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARÍA CORREDENTORA Y POR LA FUNDACIÓN ACRESCERE.

Debía subsanar la acreditación de la Solvencia Técnica o Profesional, tanto de FUNDACIÓN ACRESCERE como del CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARÍA CORREDENTORA ya que únicamente presentaba declaración de los trabajos efectuados junto a unas cuentas anuales, en el primer caso y respecto al segundo caso, únicamente, declaración de los trabajos efectuados, pero no se aportaba ningún documento que justificaba su ejecución, por lo que debían acreditarlos, tal como se exige en el punto b), apartado 7 de la cláusula 1 del PCAP.

Respecto de la justificación de solvencia técnica de la FUNDACIÓN ACRESCERE no queda acreditada, ya que comprobada la documentación presentada para su justificación (recibos ingresos, memoria, contratos...) se constata que el objeto del Centro Infantil para familia en situación de dificultad social "Ángel de la Guarda". Proyecto socio-educativo de 0-6 años para madres trabajadoras no se corresponde con el objeto del Acuerdo Marco consistente en la prestación de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerlas, a pesar de disponer de un servicio puntual y sin asiduidad de educación infantil y estimulación para niños con discapacidad, del que tampoco se presenta justificación documental de importes.

Por lo que se refiere a la justificación de solvencia técnica del CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MARÍA CORREDENTORA, tampoco queda acreditada, ya que de la documentación presentada para su justificación (cuenta de pérdidas y ganancias, extracto de cuentas, contratos, solicitud justificación curso 20/21...) no se deducen los importes imputables a la prestación de servicios para el tratamiento de menores entre 0 y 6 años, que presenten alteraciones en su desarrollo o tenga riesgo de padecerla manifestados por el empresario en su declaración responsable.

Por lo que, a la vista de la documentación presentada, no queda acreditada la solvencia técnica requerida, ya que no presenta documentos suficientes que avalen la realización de servicios objeto del Acuerdo Marco por importe de 126.638,70 euros.

Contra el presente acto de trámite, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o ante los lugares establecidos en el artículo 16. 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndolo comunicar, en este caso, al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 123 y 124 de la Ley de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a fecha de firma

EL PRESIDENTE DE LA MESA
Vº. Bº.

LA SECRETARIA DE LA MESA

